

Colosio vive

El Procurador General de la República es un dependiente del Presidente, él y no Antonio Lozano designó a Pablo Chapa como subprocurador especial para la averiguación del crimen de Lomas Taurinas, cuyo primer efecto concreto fue colocar a Zedillo en el lugar de Colosio.

NO EMPLEO LA FÓRMULA QUE DA TÍTULO A esta entrega de la "Plaza pública" en el sentido de una proclama política, sino como síntesis del modo en que el grave problema surgido a raíz del asesinato de Luis Donaldo Colosio está presente hoy, y afecta el funcionamiento del poder, y su relación con la sociedad.

Así ha quedado de manifiesto en la última semana de marzo, que arrancó el 23, con los recordatorios formales al ex candidato presidencial caído en Tijuana hace dos años. El contraste entre lo dicho entonces por el presidente Zedillo y el padre de la víctima, don Luis Colosio Fernández, ahonda la percepción generalizada, y condensada en tres conclusiones: que el crimen de Lomas Taurinas resultó de una acción del poder; que, en consecuencia, sólo se puede resolver mediante el despliegue pleno del poder; y que, sin embargo, ese poder no está siendo ejercido para ese efecto (y tampoco para otros, según queja que se universaliza).

Aunque no mencionó ningún nombre, la oración fúnebre del señor Colosio en Magdalena de Kino tuvo claros destinatarios. Dijo que no se ha hecho justicia "porque los hombres del poder no la dejan llegar". Sus reproches iban y venían, dolidos, exigentes. A veces su denuncia adquiría concreciones, a modo de retrato hablado. A veces reproducía preguntas que se expresan por doquier: "¿Quién o quiénes impiden actuar? ¿Qué intereses se colocan por encima de la obligación de procurar justicia de manera expedita? ¿Qué poderosas razones pueden imponerse al Estado, más allá de la obligación de la justicia?" Recordó el señor Colosio cómo el inicial compromiso de Salinas por resolver el crimen se transformó en burla: Dirigiéndose a su hijo -esa forma tomó su canto funerario, el de un mensaje a su primogénito-, trajo a la memoria "que apenas caía la última palada de tierra sobre tu sepulcro y ya estábamos recibiendo el pésame y comprometiendo la credencial de que se haría justicia. Ese compromiso que en un principio nos inspiró confianza, ahora parece una burla a tu familia y a los mexicanos, porque desde el origen de las investigaciones el aparato judicial fue viciado, con versiones ridículas, con cambios en el escenario de tu crimen y con torpezas de los funcionarios judiciales".

Pero el padre de la víctima no se limitó a denunciar el pasado: "Hay un manto de impunidad -dijo- tendido por aquellos que tienen la responsabilidad de resolver el caso y no lo han hecho, por aquellos que apuestan al olvido y al tiempo para lograr su cometido: evadir el castigo que merecen".

Aunque acudió a hacer una guardia ante el feo monumento a Colosio en Polanco, el presidente Zedillo eligió no referirse directamente al suceso. En su nombre, el vocero presidencial Carlos Almada leyó un documento en que, más que referirse a las indagaciones sobre el crimen, se determina cómo deben comportarse los ciudadanos al demandar justicia en este caso: "Se trata de una exigencia que no debe ser desvirtuada; no debe utilizarse para avanzar intereses particulares o manipularse con intereses sensacionalistas". Y, en una afirmación que no estaba siendo compartida a la distancia por la familia de la víctima aseguró que "ha hecho todo lo indispensable para asegurar que las investigaciones se lleven a cabo con plena independencia, absoluta libertad, estricto apego al derecho y bajo la única instrucción de buscar la verdad para hacer justicia".

Con esas palabras, el Presidente ratifica su convicción de que la averiguación le es ajena, que corresponde a un órgano sobre el que no tiene imperio alguno, y del que le queda sólo, como al resto de los mexicanos, esperar que alguna vez arribe a una conclusión verosímil. Y no es verdad que pueda desahirse de su responsabilidad en ese caso, porque el Procurador General de la República es un dependiente suyo, porque él mismo (como lo recordó el diputado panista Antonio Tallab en la tribuna de la Cámara) y no Antonio Lozano designó a Pablo Chapa como subprocurador especial para la averiguación de ese y otros crímenes, y sobre todo por la trascendencia política de aquel homicidio, cuyo primer efecto concreto fue colocar a Zedillo en el lugar de Colosio.

Tan no puede el caso limitarse a los confines de la procuración y la impartición de justicia, que el Congreso formó, ya en dos legislaturas, una comisión para dar seguimiento a las investigaciones de ese caso. No es pertinente por ahora entrar en el examen de la conducta de aquellos diputados y senadores, miembros de esas comisiones, que pierden frecuentemente la oportunidad de callar. Con sus decires fuera de foro y de tono estorban en vez de estimular

la apreciación pública de las averiguaciones y los procesos, en aras de su promoción personal, de su afán de figurar (que no satisfacen como deberían hacerlo, en el trabajo propiamente parlamentario). Pero la idea que presidió la integración de ese grupo legislativo es válida, y se ejerció en una insólita entrevista de sus miembros con el asesino único (ese es, por ahora al menos, su carácter procesal) de Colosio, Mario Aburto Martínez.

La comisión de seguimiento no es, por supuesto, parte de los procesos, y el de Aburto ya concluyó. Por eso el encuentro entre los legisladores y el homicida tuvo un carácter político, y su resultado subrayó el tono de confusión

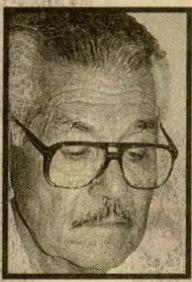


No es la primera vez que Córdoba anuncia su disposición a presentarse, si la PGR lo llama, pero una especial timidez asalta al ministerio público federal siempre que se trata de Córdoba o su jefe Salinas.

que ha prevalecido a lo largo del funesto suceso y sus secuelas. Reunidos en Almoloya (donde, a pesar de sus normas de alta seguridad un reo se suicidó en estos días), senadores y diputados oyeron a Aburto Martínez, confeso de su crimen, desdeirse una vez más, y negar que él hubiera disparado. No ofreció información alguna, en cambio, sobre la razón por la que estaba la tarde del crimen en Lomas Taurinas, y a instancias de quién admitió figurar como culpable.

Fortalecida con esa entrevista la afirmación de que Colosio fue ultimado mediante una conjura, que sólo pudo ser urdida desde el poder, pareció normal, aunque inesperada, la reaparición pública de José Córdoba. En una clara reacción a lo dicho por don Luis Colosio al diario hermosillense *El Imparcial*, sobre que el número dos de la Presidencia "tuvo mucho que ver" en el asesinato de su hijo, Córdoba dirigió una imperativa conminación al procurador Lozano, cuyo tono no alcanzó a ser atemperado con el verbo rogar, usado para pedir que se le cite o se le exonere.

Pero la Procuraduría insiste en su renuencia de llamarlo a declarar. No es la primera vez que Córdoba anuncia su disposición a presentarse, si la PGR lo llama, pero una especial timidez asalta al ministerio público federal siempre que



La oración fúnebre del señor Colosio en Magdalena de Kino tuvo claros destinatarios. Dijo que no se ha hecho justicia "porque los hombres del poder no la dejan llegar".

se trata de Córdoba o su jefe, Carlos Salinas, quien también en diciembre pasado se manifestó abierto a ser citado. Córdoba no ha acudido espontáneamente, explicó al reportero de *Reforma* Gerardo Román (que lo entrevistó ante la entrada de su residencia en la colonia Roma), porque no sabe nada del crimen, pues previamente al 23 de marzo no tuvo ningún indicio sobre su preparación, y salió de la oficina presidencial poco después del asesinato.

La imagen que de ese modo presenta Córdoba de sí mismo contrasta con la de poderío y capacidad de información que era la suya durante el sexenio de Salinas. Ahora busca aparecer como un desconcertado mal lector de periódicos, pues no obstante que los diarios capitalinos dieron cuenta de cómo se gestó la entrevista de *El Imparcial* con el señor

Colosio (realizada a petición suya el 21 de marzo y aplazada a su publicación el 24, también a su solicitud), Córdoba sugirió que se trataba de un refrito, de algo dicho hace un año y rescatado hoy. Pero como sabe que no es así, por tal razón decidió encarar su eventual citatorio y de paso poner en ridículo a la PGR, que cuando lo llame a declarar estará cumpliendo no su deber sino una orden de Córdoba.

El virtual vicepresidente de México en los años de Salinas resolvió tomar el toro por los cuernos sabedor quizá de que su antiguo jefe, conforme a su naturaleza, propicia su conversión en chivo expiatorio, para quedar él mismo, Salinas, a salvo una vez más. Esa parece ser, en efecto, la intención de un largo texto depositado en las oficinas del diario *Reforma*, dirigido "a la opinión pública", en donde se expone la tesis del "error de Estado", que mejor debería llamarse "de cómo se les pasó la mano". El cogollo del mensaje consiste en decir que, como culminación de una creciente rivalidad entre Colosio y Córdoba, éste dispuso que miembros del Estado Mayor presidencial lesionaran levemente al candidato priista, para hacerlo simpático y suscitara con eso un alza en su decaída campaña. De paso, Colosio sabría cuán vulnerable era, y se alinearía con Salinas en los términos que acababa de exponerle el coordinador de su campaña, Ernesto Zedillo, en su carta del 19 de marzo. Pero, en vez de un balazo en un brazo o una pierna, Colosio recibió uno en la cabeza, que lo mató.

La versión es pueril. Todo el texto es deleznable, aunque su publicación era imprescindible, por responsabilidad ante los lectores, luego de comprobar algunos de los hechos allí enunciados. Quien lo escribió es lector ferviente (o autor quizá) de columnas de chismes políticos, y por eso hay en sus profusos párrafos tantas fantásticas conjeturas, tantas presuntas invasiones del fuero interno ajeno, como resultado de las cuales se sabe exactamente qué pensó tal o cual persona, y a qué obedecían sus estrategias. A su muy elemental nivel de análisis se agrega un deplorable uso del lenguaje, pues confunde injerencia con influencia, cree que celebrar u ofrecer una cena es equivalente a sostener una cena y hasta inventa gerundios, como "debengando" donde quizá quiso decir deviniendo.

Pero eso importa nada, por supuesto, comparado con el propósito casi explícito de soslayar la presencia de Salinas en los episodios que narra, compuestos con una mezcla de informaciones periodísticas y hechos difundidos en privado por personal cercano a Colosio. El entonces Presidente aparece, todo lo más, como un árbitro a menudo divertido con las querellas entre sus amigos, dispuesto siempre a aclarar el verdadero móvil de acciones suyas que eran inadecuadamente atendidas.

Todo habría transcurrido a sus espaldas, ocupado como estaba en recuperar la estabilidad perdida y en el comienzo de su campaña para dirigir la Organización Mundial de Comercio.

El largo intento exculpatorio de Salinas sufre, sin embargo, un desliz donde se resumen la importancia del texto, y la conveniencia de su publicación. El oculto autor, que además de esconderse quiso jugar una charada con su seudónimo (Armani Hubard Soberani) esboza un retrato tal de Salinas, que lo hace protagonista de un excepcional acto de generosidad: pidió a Diana Laura Riojas viuda de Colosio el perdón para Córdoba, explicando que sus torpes subalternos habían cumplido mal la orden de sólo herirlo.

Es inverosímil esa versión. Pero quien puede refutarla plenamente es el propio Salinas, cuando sea llamado a declarar. No respecto de sea decaído como esa, pero sí respecto de la situación política que constituyó el marco del asesinato, así como de sus acciones antes y después del episodio, es imprescindible que Salinas rinda testimonio. Pero estoy entrando en el terreno de lo ilusorio, pues los lazos que unen a la actual administración con la anterior, de la que es causahabiente, dificultan enormemente la implicación a Salinas y aún a Córdoba, pues se trataría de una autoincriminación.

No debe olvidarse que el número dos de la Presidencia mantenía, y quizá conserva aún, especiales lazos con dos economistas del más alto nivel gubernamental. Uno de ellos es Guillermo Ortiz, subsecretario de Hacienda en la época en que Córdoba era el hombre fuerte, y titular de esa secretaría hoy. Se hicieron amigos en la Universidad de Stanford hace veinte años, y a instancias de Ortiz Córdoba vino a México, donde trepó con extrema rapidez hacia la punta de la pirámide. El otro es Ernesto Zedillo, a quien desde el principio del proceso de sucesión en el PRI, hace menos de un lustro, Córdoba contó entre sus opciones preferidas. Con ese vínculo, es difícil que ni siquiera Córdoba sea llamado a la PGR, pese a su propia insistencia.

En el caso de Rubén Figueroa, el presidente Zedillo quedó inutilizado para continuar apoyándolo (lo que hizo con eficacia durante largos ocho meses) cuando factores externos lo forzaron a elegir entre su amigo y él mismo. Sólo una conjunción de elementos ajenos a su propia voluntad podría inducirlo a un cambio en relación con la ausencia procesal de Salinas y Córdoba, tan deseosos de comparecer como reticente está la PGR a llamarlos.